

# AMERICA LATINA Y LA ECONOMIA POLITICA DE LA CORRUPCION

**Elvis Ojeda Calluni**

Jefe del programa de investigaciones económicas  
del Centro Científico-educativo de Investigaciones Latinoamericanas  
Universidad de Rusia de la Amistad de los Pueblos  
Calle Miklujo-Maklaya 6, 117198, Moscú, Rusia  
ejeda@mail.ru

## RESUMEN

*El presente artículo hace un análisis de la economía política de la corrupción en América Latina. Busca explicar la corrupción desde la perspectiva económica, haciendo una descripción de las oportunidades económicas existentes en la región para la corrupción. Se hace una descripción de la situación actual, con énfasis en la debilidad de la institucionalidad democrática y la creciente intolerancia social contra la corrupción, describiendo los episodios más importantes que caracterizan la corrupción sistémica en la región. Finalmente, se evalúa los costos económicos de la corrupción y su impacto en el desarrollo económico y social.*

## INTRODUCCION

Las diferencias entre países en su nivel de desarrollo siempre han fascinado e inspirado a los economistas.

Hoy sabemos que para explicar estas diferencias tenemos que entender, a través de la historia de los países, sus instituciones formales e informales y sus dinámicas políticas, ¿cómo es que algunas naciones han podido salir de la pobreza y construir democracias fuertes, mientras que otras se quedan en círculos viciosos, donde unos pocos con poder económico o político se aprovechan de debilidades institucionales a costo de la sociedad?. [1]

Un aspecto clave para comprender el desarrollo, o la falta del mismo, es entender el fenómeno de la corrupción. La corrupción fomenta y estabiliza este círculo vicioso, siendo tanto una fuente de rentas ilícitas y de poder, como una herramienta para mantener débiles las instituciones de un país.

Las ciencias sociales han avanzado bastante en explicar el fenómeno de la corrupción durante los últimos 20 años. También está comprobado su efecto altamente dañino para cualquier sociedad, no solo en términos económicos, sino también por socavar la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos, violar los derechos humanos y nutrir ciertas costumbres culturales indeseadas. Mientras que entendemos cada vez mejor el problema, estamos lejos de entender qué tipo de

medidas son efectivas contra este flagelo. Se predicán la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.

La corrupción no será el oficio más viejo del mundo, pero sí es una práctica que se remonta a tiempos inmemoriales, en la que siempre han jugado papeles determinantes el dinero, la política y lo que se deriva de ambas en variables proporciones, el poder. La realidad es que no existe en la política representantes que no hayan estado vinculados con la corrupción en cualquiera de sus expresiones, particularmente la económica y el abuso de poder, otra forma de corrupción, al igual que el tráfico de influencias y el soborno.

En los años 80, cuando se efectuaron la mayoría de las transiciones democráticas en los países de América Latina, muchos pensaron que los males endémicos de la región como ser la corrupción, comenzarían a desvanecerse en forma automática. No fue el caso.

Según reportes de la Organización de Estados Americanos (OEA), la mayoría de los países de América Latina han avanzado en los últimos 20 años en el desarrollo o reforzamiento de regulaciones e instituciones de auditoría, contraloría, transparencia y persecución de la corrupción. No obstante, la reciente agudización de los escándalos de corrupción parecen recordarnos una vez más que el camino para combatir este fenómeno es mediante organismos independientes a los gobiernos con capacidad para investigar y armar casos sólidos combinado con un eficaz sistema judicial que no tema castigar a corruptos, aunque sean gobernantes o grandes empresarios.

En la región, la noción de corrupción suele asociarse a la administración pública, a políticos y gobernantes, pero que “en todos los grandes escándalos siempre hay uno o varios entes privados, en un matrimonio perverso con la política: están los temas de financiación de campañas, compra de congresistas para que aprueben determinados proyectos o compra de funcionarios públicos para que desvíen las licitaciones, etcétera.

El profesor de la Universidad de Chile, José Zalaquett, explica que esos casos “no tienen que ver con la economía de mercado, sino con la naturaleza humana. En la medida que usted tenga incentivos que lo muevan en el sentido de la transparencia, la probidad y la rendición de cuentas, y tenga desincentivos para portarse mal, eso influye mucho en el comportamiento. Porque las personas generalmente hacen un cálculo costo-beneficio”. [2]

La historia reciente de la región, desarrollada en un contexto caracterizado por una acentuación de la corrupción económica y política, y la desilusión por el fracaso de los gobiernos de izquierda en buena parte de los países, denotan expresiones de descontento generalizado, que es fácil de comprender por la creciente intolerancia de las clases medias de la región latinoamericana ante niveles inéditos de corrupción jamás antes percibidos.

A lo largo del subcontinente, cada vez es más frecuente ver multitudinarias manifestaciones contra el saqueo de los recursos públicos y contra sus presuntos responsables. La gente de la región parece haber perdido la paciencia con un problema que, según la consultora estadounidense Global Financial Integrity, nos

cuesta 142.920 millones de dólares anuales, lo que equivale al 3 por ciento de todo el producto bruto de la región. [3]

Este descontento va acompañado además de desconfianza hacia las autoridades constituidas. El movimiento anti-corrupción es tan generalizado que, mientras una generación de políticos de la región acusados de corrupción ha salido del poder —forzados a renunciar o rechazados en las elecciones—, nuevos mandatarios (muchos beneficiados por la ola de descontento popular), parecieran estar en camino a repetir ese destino: jefes de Estado o sus familiares en Brasil, Perú, Argentina, Ecuador, Chile, México, y centroamérica se han visto involucrados recientemente en escándalos relacionados con sobornos y tráfico de influencias.

Siempre se robó abundantemente en esta región del mundo. Pero el volumen gigantesco de dinero fresco que entró en este período y la coincidencia de que estuvieran en el ejercicio del poder gobiernos de “izquierda”, cuya enorme corrupción permanecía oculta, está dejando al descubierto no solo un nivel de latrocinio, mentira e inmoralidad pocas veces visto en la historia, sino también un esquema de manipulación política antidemocrática, para quienes la corrupción ha dejado de ser un medio para lograr el enriquecimiento rápido, y se ha convertido en una finalidad política: el control del Estado. [4]

Además, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, los escándalos de corrupción actuales son investigados y llevados a juicio con un grado de independencia sin precedentes. En una región habituada desde hace mucho a la impunidad de las elites políticas y económicas, esto implica un cambio tectónico. Son cambios que, resultan indispensables para desarrollar la confianza en las instituciones públicas, que a su vez es fundamental para el progreso económico.

En general, los funcionarios latinoamericanos electos están recibiendo el mensaje y apurándose a sumarse a las iniciativas para la buena gobernanza. Si los líderes políticos y empresariales de la región suman sus voces a la protesta contra la corrupción, Latinoamérica puede lograr una ruptura definitiva con su pasado y garantizar que todos los ciudadanos puedan confiar en la implementación justa del imperio de la ley y alcanzar su máximo potencial.

El saldo positivo de esta epidemia de escándalos de corrupción que hoy sacude a la región muestra un aspecto que analistas como el excanciller mexicano Jorge Castañeda consideran muy positivo: la protesta ciudadana. Esto es prueba, de que algo está cambiando en nuestras sociedades, las cuales hoy “se rehúsan a ser cómplices de la corrupción o a resignarse a su inevitabilidad”. [5]

*El objetivo de este trabajo* es reflexionar sobre la corrupción en la región latinoamericana desde un punto de vista económico e interiorizarse en las posibles causas que llevan a los individuos a actuar de manera corrupta y a las sociedades a tolerar estas prácticas. Ciertamente, la óptica económica no es la única pues la corrupción tiene a su vez implicancias éticas, políticas y sociales. No obstante, la discusión desde una óptica económica aporta elementos para diseñar mecanismos de contención de la corrupción y mitigar sus efectos más dañinos. Asimismo, el análisis económico nos advierte acerca de qué condiciones pueden fomentar el surgimiento o la generalización de prácticas corruptas.

## I. EL ANALISIS ECONOMICO DE LA CORRUPCION

### ¿Cómo entender la corrupción desde la economía?

El objetivo de la economía como disciplina de conocimiento consiste en entender el modo en que una sociedad se organiza para tomar colectivamente las decisiones sobre qué tipo de cosas producir, cómo producirlas y cómo distribuir lo producido entre los distintos miembros de la sociedad. Todas esas preguntas conforman el llamado problema de asignación de recursos y, del modo en que se resuelvan, se derivan una gran cantidad de consecuencias sobre el bienestar que una sociedad puede proveer a sus miembros, la posición relativa y la competitividad de cada país y sobre la mayor o menor justicia con que se distribuye la riqueza en cada sociedad. Si admitimos que el anterior es el programa de investigación de los estudiosos de la economía, debemos admitir también que el análisis de la corrupción debe ser un tema prioritario.

Aparentemente basta con el sentido común para catalogar como actos de corrupción un amplio conjunto de comportamientos individuales; sin embargo, la corrupción para las ciencias sociales es un concepto difícil de definir con precisión. La corrupción es más fácil de identificar que de definir. Por ese motivo, es comprensible que exista una variedad de definiciones alternativas, sin que ninguna de ellas resulte completamente satisfactoria.

A modo de ilustración podemos tomar una definición habitual de corrupción presente en múltiples trabajos de análisis económico. “La corrupción podría definirse como la venta por parte de funcionarios o agentes oficiales de derechos, bienes o servicios de propiedad pública con el propósito de obtener una ganancia personal”. [6] Esta definición, sin duda útil, pone de manifiesto el carácter económico de la corrupción: cuando un funcionario cobra un soborno por conceder un permiso o una licencia, o por asignar un contrato de obra pública, está obteniendo una renta privada por la venta de un bien de titularidad pública. Siempre que la concesión de los mismos dependa en alguna medida de la discreción de los funcionarios públicos, se darán las condiciones institucionales para que aparezca la corrupción.

Definir la corrupción puede parecer sencillo y la mayoría de la gente cree saber reconocerla cuando la ve. Más que una simple transacción entre dos, la corrupción puede considerarse “la privatización de la política pública”. Las poderosas élites políticas y empresariales se confabulan para controlar las instituciones públicas, hacerse amos del proceso de formulación de políticas y monopolizar los contratos y adquisiciones. Consecuentemente, la corrupción asume un sentido todavía más amplio como “la falta de imparcialidad del gobierno”, a raíz de lo cual el dinero público y la autoridad se utilizan de forma que perjudica el bienestar de las personas. [7]

La corrupción es un tópico que está siendo discutido de manera creciente en el contexto del desarrollo económico y político de los países latinoamericanos. No

existe, sin embargo, una visión unitaria sobre este problema. Transparencia Internacional (capítulo nacional de Colombia), sintetiza el concepto de corrupción en una versión latinoamericana, como “el abuso de poder político, económico o social para beneficio particular y en detrimento del bien general” y considera que en la región las maneras más comunes en las que se manifiesta tienen que ver con la prestación de servicios y relacionado con unas prácticas clientelares del ejercicio de la política, donde la prestación de esos servicios pasa por unos esquemas de contratación sometidos a pago de favores, a redes de políticos locales que cooptan las instituciones y se quedan con buena parte de los recursos”. [8]

Otros expertos, que basan su criterio en investigaciones realizadas en un vasto número de países, sugieren que la corrupción puede tener un importante efecto negativo en los niveles de inversión, crecimiento, igualdad y bienestar de una economía. Para otros, por el contrario, la corrupción permite aceitar el funcionamiento de la economía cuando el exceso de regulación sofoca el accionar de la empresa privada o cuando las normas han sido mal dictadas. Finalmente, algunos autores señalan que la corrupción resulta de modo natural del proceso de desarrollo político y económico de un país. [9]

En vista del amplio abanico de comportamientos que podrían formar el universo de la corrupción, resulta comprensible que existen también múltiples definiciones más o menos comprensivas. Por ejemplo, la definición adoptada por el Banco Mundial identifica como corrupción, “cualquier abuso del poder público para beneficio privado”.

Para la economía, la corrupción es sobre todo el resultado de un arreglo institucional que, como cualquier otro que podamos imaginar para resolver los problemas de asignación de recursos, resulta en la utilización de los recursos públicos o privados y las habilidades de los individuos para unos fines privados y sociales en detrimento de otros. Por ese motivo, el aporte de la economía al estudio de la corrupción debe consistir en estudiar el modo en que los comportamientos individuales y los arreglos institucionales que favorecen la corrupción afectan el bienestar económico, bien porque conduzca a niveles inferiores de producción de los que pueden obtenerse con los recursos disponibles, bien porque la corrupción perjudica las posibilidades de crecimiento económico, o bien porque tenga consecuencias sobre la distribución de la riqueza en favor, como es de esperar, de los agentes económicos mejor posicionados para beneficiarse de las oportunidades de corrupción que ofrezca la sociedad. [10]

Es evidente que el tema de la corrupción ha atraído la atención de los analistas económicos y que actualmente disponemos de una cantidad notable de información, sin embargo, el tema sigue dando lugar a importantes controversias. La razón principal podría encontrarse en la dificultad de extraer conclusiones claras sobre las consecuencias económicas de la corrupción. A pesar de las evidencias que parecen mostrar que, la corrupción empobrece la economía y perjudica sus posibilidades de desarrollo, no es posible afirmar que existe una relación directa entre los niveles de corrupción, o más precisamente los niveles de percepción de la corrupción, y los niveles de desarrollo relativo de los distintos países.

Del mismo modo, a pesar de que el origen de los hechos de corrupción se encuentra, de un modo u otro, en la existencia del gobierno (más concretamente en el monopolio de la ley y en el poder discrecional de las autoridades del gobierno), no existe tampoco una relación directa entre el tamaño del estado y la presencia de la corrupción.

Si se observan los países que han conseguido superar el subdesarrollo en las últimas décadas, tampoco parece posible concluir que la transparencia sea un requisito para un desarrollo económico exitoso.

Sin menospreciar la utilidad del tipo de definiciones ensayadas, es importante mencionar, en primer lugar, que la definición de corrupción debe servir para agrupar un tipo de comportamientos económicos que compartan algunas características.

En segundo lugar, es importante tener en cuenta que el análisis económico tiende a concebir los comportamientos humanos como respuestas racionales de los individuos frente a los incentivos y oportunidades que ofrece el marco institucional en que estos desarrollan sus actividades.

En otras palabras, si nuestro objetivo consiste en comprender las causas económicas de la corrupción, así como sus consecuencias sobre el bienestar individual y las posibilidades de progreso económico de un país, el énfasis ha de ponerse, por una parte, en identificar en qué contextos institucionales es más probable que se desarrollen comportamientos de corrupción y, por otra, en cuales son las razones que explican que estos arreglos institucionales se mantengan, adopten nuevas formas o, eventualmente, sean sustituidos por formas más eficientes de asignación de recursos.

### **Las oportunidades económicas para la corrupción**

El sistema de incentivos de la corrupción por norma se desarrolla cuando la demanda de servicios corruptos (es decir, la oferta de sobornos) depende del tamaño y la estructura del Estado. Se pagan sobornos por dos razones, para obtener beneficios gubernamentales y para evitar costos. Kimberly Ann Elliott en su trabajo investigativo “La corrupción en la economía global” [11], al describir los factores que generan la demanda de los servicios corruptos, describe las tres grandes esferas de la relación pública-privada- ciudadana que abren oportunidades económicas para la corrupción:

#### **1. Pagar para obtener un beneficio gubernamental**

En cualquier parte del mundo, el gobierno compra y vende bienes y servicios, distribuye subsidios, organiza la privatización de empresas estatales y otorga concesiones. Los funcionarios con frecuencia detentan un monopolio de información valiosa. Todas estas actividades dan lugar a incentivos para la corrupción.

*Cuando el gobierno es un comprador o contratante*, existen varias razones para sobornar a los funcionarios. La primera, una empresa podría pagar para ser

incluida en la lista de los concurrentes que cumplen con los requisitos. La segunda, la empresa podría pagar para hacer que los funcionarios estructuren las especificaciones de la licitación de tal modo que la empresa sea el único proveedor calificado. La tercera, una empresa podría pagar para ser seleccionada como el contratista ganador. Y cuarta, una vez que se ha seleccionado a una empresa, ésta podría pagar para obtener precios inflados o para escatimar en la calidad.

*Muchas veces los gobiernos venden bienes o servicios a precios menores que los del mercado.* Con frecuencia hay dualidad de precios, un precio estatal bajo y un precio mas alto en el mercado libre. Entonces las empresas sobornan a los funcionarios para tener acceso a los suministros estatales con precios por debajo del mercado libre. En algunos países diversas materias primas se venden tanto a precios subsidiados por el Estado como en el mercado libre.

*Los pagos ilegales son comunes también cuando la oferta de créditos y las tasas de interés están controladas por el Estado es muy frecuente que se paguen sobornos para tener acceso a dichos créditos.* Otra cosa parecida para con las operaciones del tipo de cambio. En muchas ocasiones los tipos de cambio múltiples no reflejan los fundamentos económicos subyacentes produciéndose así incentivos para pagar sobornos para obtener divisas extranjeras escasas a un buen tipo de cambio.

*La asignación de permisos de importación y exportación escasos también es una fuente frecuente de pagos ilegales, y los sobornos se relacionan con el valor de los beneficios monopólicos conferidos.*

La corrupción también puede ocurrir *cuando el nivel de subsidios y beneficios es demasiado reducido* para satisfacer a todos los que cumplen con los requisitos, *o bien cuando los funcionarios deben usar su criterio para decidir quien está calificado para un derecho.* Un servicio puede ser escaso, por lo que las personas pagarán para que se les designe entre los usuarios, o el servicio puede ser un derecho para todos aquellos que cumplan los requisitos por lo que la gente pagará para ser incluidos en el grupo de los que se consideran dignos de recibir beneficios. *Casos de corrupción son comunes en la ejecución de programas de vivienda subsidiados por los gobiernos.* Otros casos de corrupción se presentan cuando se hacen *pagos ilegales para alterar los resultados de los exámenes de admisión a las universidades ó para inducir a los médicos a declarar incapacitados a personas* de modo que estas puedan calificar para el pago de subsidios.

*La privatización de empresas de propiedad estatal* puede mejorar el desempeño de la economía y reducir la corrupción en el proceso. Sin embargo, la propia transferencia de activos estatales a propietarios privados puede crear incentivos para la corrupción. La venta de una empresa pública grande es similar a la oferta para conseguir un proyecto importante de infraestructura pública. Por tanto los incentivos para caer en malos manejos son similares. Una empresa puede pagar para ser incluida en la lista de los concursantes calificados o para limitar su número. Podría pagar para obtener un avalúo menor de la propiedad pública que va ha arrendarse o venderse, o bien para resultar favorecido en el proceso de

selección. Algunas transacciones corruptas pueden socavar los principios de eficiencia que sustentan las justificaciones económicas de la privatización. Por tanto, si las compañías pagan para preservar el poder monopólico de la empresa después que pase a manos privadas, el resultado quizá sea la simple transferencia de las utilidades del Estado a los nuevos propietarios. Entonces los empleados de las empresas recién privatizadas no pueden enfrentar exigencias de proveedores y clientes que busquen participar en los beneficios monopólicos.

*Por último*, para cada tipo de programas gubernamentales, es probable que los funcionarios cuenten con información de valor para las personas de fuera. Por tanto, individuos y empresas privadas podrían *pagar para obtener dicha información o por conseguirla antes que sus competidores*. Es probable que valga la pena pagar por información tales como las especificaciones de licitaciones para contratos, la condición real de las empresas que están por privatizarse o la localización de futuros proyectos de capital.

## 2. Pagar para evitar costos

Todos los gobiernos imponen *regulaciones, recaudan impuestos y hacen cumplir las leyes penales*. Los funcionarios pueden provocar retrasos y hostilizar a las personas con quienes tratan. Pueden imponer costos selectivamente en una forma que afecte la posición competitiva de las empresas en una industria.

En *programas regulados por el gobierno*, las empresas podrían pagar para obtener una interpretación favorable de las disposiciones, o bien para obtener un dictamen discrecional en su favor. Podrían pagar para evitar o aligerar la carga regulatoria o para establecer los requisitos de regulación cuando las leyes no son tan claras. Los incentivos para la corrupción pueden ser particularmente altas para las empresas estatales de reciente privatización que tratan con agencias regulatorias inexpertas, que no tienen un historial bien desarrollado. Así, quienes recomiendan a las economías en desarrollo el establecimiento de agencias regulatorias para los servicios públicos enfatizan los procesos transparentes y abiertos.

En un gobierno federal, las reglas inconsistentes puede hacer que los sobornos sean difíciles de evitar sobre todo cuando se cruzan autoridades federales y estatales con el mismo propósito de inspección en las empresas.

*Los impuestos* siempre son gravosos por lo que negocios e individuos podrían coludirse con recaudadores fiscales para disminuir las sumas cobradas. Los ahorros así logrados se reparten entre el contribuyente y el funcionario. Son particularmente altas las probabilidades de que los funcionarios aduaneros participen en la corrupción, ya que controlan algo que las empresas valoran: el acceso al mundo exterior. Los pagos ilegales se utilizan para reducir los aranceles y tarifas de exportación, así como para obtener permisos de importación y de exportación. Esta es un área en la que los economistas con una orientación de mercado y las del reformador que combate la corrupción van de la mano. Las políticas de libre comercio mejoran la eficiencia bajo la mayoría de las condiciones, a la vez que reducen las rentas económicas disponibles para

funcionarios corruptos. Tolerar la corrupción como una forma de evadir las políticas comerciales restrictivas redundará en inequidades e ineficiencias generalizadas. Muchos estudios indican que conforme aumentan las tarifas arancelarias, los aranceles recaudados disminuyen como una proporción de los aranceles nominales y la variabilidad de las tarifas realmente pagadas se incrementa. Estos resultados concuerdan con la opinión de que los incentivos para la corrupción aumentan con los gravámenes y las tarifas arancelarias.

Los negocios ilegales son particularmente vulnerables a la extorsión. Las autoridades encargadas de hacer cumplir las leyes, desde la policía hasta los fiscales y los jueces, pueden exigir pagos a cambio de pasar por alto las violaciones o atenuar las sanciones. Si la evidencia de una conducta penada es contundente, estos negocios no gozarán de credibilidad si amenazan de denunciar las exigencias corruptas. Pero desde luego, los negocios ilegales difícilmente son víctimas inocentes. Podrían hacer reiterados intentos para corromper a la policía. No solo buscan la inmunidad al encauzamiento para sí mismos sino también la garantía del poder monopólico en el mercado ilegal. Las autoridades policiales pasan a convertirse en muchos países en portectores del crimen reprimiendo a la competencia.

Puesto que el tiempo es dinero, las empresas y los individuos de todas partes pagarán para evitar los retrasos. Por ejemplo cuando el Estado no paga sus cuentas a tiempo, los contratistas o los clientes podrían sobornar a funcionarios gubernamentales para agilizar el pago. En muchos países se requieren pagos ilegales para obtener servicios expeditos tales como un pasaporte, una licencia de conducir o una certificación. En ocasiones el acceso acelerado a estos servicios solo está disponible para el corrupto y no para los ciudadanos honestos y pacientes.

### 3. Pagar por un cargo público

Cuando la corrupción es generalizada, los puestos en la burocracia estatal se vuelven activos valiosos, y hay una demanda derivada de empleos en el sector público. En algunos países en desarrollo existe un activo mercado de puestos burocráticos que generan enormes sobornos. Es probable que los puestos en un departamento de policía corrupto sean de especial valor. Los empleos en dependencias con pocas oportunidades para la corrupción podrían atraer a pocos solicitantes calificados, pero si los tabuladores salariales del gobierno son más altos que los del sector privado, las personas podrían pagar por tales empleos, aún cuando sean contadas las oportunidades de soborno.

Pero un común denominador en la distribución de cargos públicos en países de América Latina está ligado al “clientelismo” político que los partidos promueven en las campañas electorales, donde un “aporte económico de campaña” o un activismo de lealtad a la causa, significa una inversión para luego de acceder al poder demandar un puesto con potencialidad de recompensar el monto y la lealtad invertidas.

## **El análisis económico de la corrupción**

El análisis económico de la corrupción tiene variadas diferencias de acuerdo a las instancias que la efectúan.

*El análisis que se realiza desde la óptica del sector público, frecuentemente olvida que la corrupción representa un robo de recursos públicos.* No es inusual encontrar análisis que igualan la corrupción a un impuesto.

En primer lugar, aunque tanto los impuestos como la corrupción imponen mayores costos al productor, la recaudación de esta última es “privada” y, por lo tanto, se pierde el potencial uso de dichos recursos en fines socialmente más productivos. En segundo lugar, la corrupción es costosa para la sociedad por el hecho mismo de ser ilegítima. Por un lado hay recursos destinados a evitar la corrupción y sancionarla, y por otro lado, quienes participan en actos corruptos deben destinar recursos a evitar ser descubiertos. La necesidad de mantener en secreto la corrupción hace que se deban gastar más recursos para recolectar un cierto monto de “recaudación” que si se usa directamente un impuesto. Peor aún, a diferencia de un impuesto, la corrupción genera distorsiones sociales y políticas potencialmente mucho más graves que las inducidas por un impuesto.

*Un elemento crucial en el análisis de los costos de la corrupción es que el daño hecho usualmente es considerablemente superior al monto del soborno mismo.* Frecuentemente, la recaudación de sobornos es sólo una fracción menor de lo que la sociedad paga por la práctica corrupta tanto en ineficiencia como en extracción directa de rentas. Evidentemente, la corrupción representa un aumento en el precio de la administración porque el contribuyente que se somete al pago de sobornos tiene que pagar varias veces por el mismo servicio. Adicionalmente, la sociedad paga por las externalidades asociadas a la corrupción que ya hemos descrito.

*La toma de decisiones en el sector público puede ser dramáticamente adulterada cuando los servidores públicos son corruptos.* Por un lado, la corrupción suele conducir a la aprobación de proyectos públicos basados en la capacidad que tiene el funcionario corrupto de extraer beneficios del mismo y no en su necesidad social. Prueba de ello es la tendencia en los países en desarrollo a financiar megaproyectos de infraestructura de dudoso valor social, usualmente llamados “elefantes blancos”. Ello lleva a decisiones de inversión y tecnología inadecuadas. Por otro lado, cuando las decisiones no son honestas, se tiende a una falsificación de la información y los datos que hace difícil la planificación e implementación de las políticas económicas. En último lugar, la corrupción lleva una pérdida de confianza en la capacidad del gobierno para implementar las políticas económicas. La población acepta y apoya políticas públicas cuando los funcionarios públicos son competentes, imparciales y actúan de manera honesta. Por el contrario, cuando el Estado es corrupto, apoyar una política o cumplir una normativa es generalmente menos beneficioso para los individuos que pagar un soborno. Se produce, así, un equilibrio de no-cooperación entre los individuos, en el que para todos es más beneficioso individualmente aceptar la corrupción.

Así, por ejemplo, mientras mayor sea la posibilidad de recibir sobornos, es posible que se realice un mayor número de proyectos de inversión pública que lo razonable, que éstos sean más grandes que el óptimo —pues ello maximiza la

probabilidad de obtener pagos ilegales en la forma de incentivos (kickbacks), sobrefacturación, uso de materiales de mala calidad, etc.— y que los proyectos se retrasen como resultado de funcionarios públicos que aumentan la tramitación de los mismos para incentivar dichos pagos.

*Finalmente, existe evidencia de que la corrupción puede llevar a distorsionar la asignación del gasto público* porque se observa que países más corruptos tienden a gastar menos en educación pública, es decir, se desincentiva la formación de capital humano. Éste es un canal adicional por el cual la corrupción reduce la tasa de crecimiento de una economía. Adicionalmente, los gobiernos deben gastar también mayores sumas para detectar e inhibir la corrupción.

## II. LA ANATOMIA DE LA CORRUPCION EN AMERICA LATINA

### **La debilidad de la institucionalidad democrática y la transparencia del Estado frente a la intolerancia social contra la corrupción**

En los últimos 30 años, la democracia se ha ido consolidando en toda la región latinoamericana y podemos asegurar que los golpes de estado son cosas del pasado, sin embargo, las instituciones democráticas no han evolucionado hacia la perfección que demandan los tiempos, muy por el contrario, encontramos que los niveles de corrupción de la mayoría de los gobiernos son una verdadera amenaza a la estabilidad política y social del área.

El soborno, cohecho, enriquecimiento ilícito, falta de transparencia en el manejo de los recursos del Estado, negocios y contrataciones de obras sobrevaluadas son una constante en la clase política gobernante de América Latina. Presidentes, ministros, directores generales, funcionarios de alta jerarquía, con la capacidad para tomar decisiones y empresas privadas (empresarios corruptores) se asocian para cometer “indelicadezas” como pastoralmente le llamó el presidente Dr. Joaquín Balaguer (ex presidente de la República Dominicana) a los actos de corrupción de su gobierno. [12]

A partir de 2013, América Latina ha visto una sucesión de grandes escándalos de corrupción. Estos episodios han desencadenado movimientos sociales, enjuiciamientos de funcionarios públicos y empresarios al más alto nivel, y crisis políticas desde Brasil hasta México.

¿Es la actual efervescencia el resultado de un aumento dramático de los niveles reales o percibidos de corrupción en la región? La respuesta corta es no. Las cifras de victimización por corrupción que arrojan las encuestas regionales cuentan una historia entreverada, con niveles muy diversos de prevalencia de la corrupción entre los países de la región y trayectorias divergentes durante la última década. Sin embargo, en términos generales, las tendencias son positivas. La evidencia de un empeoramiento generalizado de las percepciones de corrupción es igualmente endeble.

En particular, la reciente ola de escándalos ha sido precedida por dos décadas de un paciente esfuerzo de construcción normativa, desarrollo institucional

y creación de mecanismos de rendición de cuentas, diseñados para prevenir y combatir la corrupción. Este proceso, frecuentemente inducido por presiones externas, está empezando a dar frutos.

En general, son extraordinarias la cantidad y la amplitud de las medidas adoptadas en América Latina con el fin de aumentar la transparencia y mejorar la rendición de cuentas. Ello incluye la casi universal ratificación por parte de los países latinoamericanos de instrumentos internacionales como la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y la robusta participación regional en la Alianza por el Gobierno Abierto (Open Government Partnership).

También incluye la aprobación de muchísimas normas nacionales, incluyendo la legislación para fortalecer a las instituciones encargadas de auditar el gasto público; normas sobre la declaración de activos por parte de funcionarios públicos; leyes de acceso a la información pública; iniciativas para modernizar los sistemas de compras públicas; el establecimiento de planes, agencias y políticas nacionales en materia de gobierno electrónico; la aprobación de leyes contra el lavado de dinero; y la introducción de regulaciones al financiamiento de campañas. Estos cambios normativos han ocurrido en prácticamente todos los países de la región.

A ello, muchos países han sumado la aprobación de normas de “delación premiada”, reformas judiciales de diferentes tipos y cambios importantes en las reglas del servicio civil. No cabe duda de que la adopción de muchas de estas reformas es más formal que sustancial y que existen obvias dudas sobre su aplicación real. Sin embargo, estos cambios han entregado nuevos poderes a ciudadanos, periodistas, fiscales y jueces, y han obligado tanto a funcionarios públicos como a empresarios a adoptar, así sea simbólicamente, estándares de conducta más rigurosos. De hecho, la evidencia sugiere que, en promedio, los sectores públicos de la región son hoy mucho más transparentes que en el pasado.

De acuerdo con los datos del Foro Económico Mundial, en el curso de la última década la capacidad de las empresas para obtener información sobre los cambios en las políticas públicas y las regulaciones que afectan sus actividades ha mejorado en 12 de los 18 países de América Latina y en la región como un todo. Más que nunca antes, los ciudadanos latinoamericanos están en condiciones de enterarse de muchos aspectos de la vida interna de las instituciones públicas.

Sin embargo lo que se llega a conocer es casi siempre desolador. De ello se deriva una implicación crucial: las reformas que aumentan los niveles de transparencia pueden tener un efecto ambiguo en la legitimidad de los sistemas políticos. En el largo plazo, el aumento de la transparencia puede prevenir irregularidades y tener un efecto saludable en la vida pública. En el corto plazo, sin embargo, estas reformas arrojaron una amarga cosecha de escándalos de corrupción, frecuentemente demolidores para la legitimidad democrática.

Consecuentemente, los avances institucionales logrados y los esfuerzos gubernamentales en el ámbito de la transparencia de la información en América Latina parecen haber generado un efecto mayor de exigencia ciudadana. Ello

explica el por qué la intolerancia contra los actos de corrupción se ha agudizado de manera dramática en la región.

¿Qué ha pasado entonces? Antes que en cambios en la corrupción real o percibida, los eventos de los últimos tres años tienen sus raíces en transformaciones en el contexto social, político y económico que rodea la corrupción. Esas mutaciones incluyen el explosivo crecimiento de las redes sociales, que hacen posible la rápida diseminación de información y la reducción de los costos para los movimientos colectivos; la notable expansión de grupos de ingreso medio políticamente muy activos; la extendida percepción de que las instituciones políticas y las estructuras económicas están sesgadas en favor de una pequeña elite; y la desaceleración económica experimentada por América Latina en los últimos años. [13]

La frustración social en muchos países de América Latina es una realidad incuestionable. Es una sensación de fracaso, desamparo, debilidad e inclusive soledad frente algo indefinible, pero muy poderoso: la corrupción y la impunidad. América Latina apesar de los abundantes instrumentos de institucionalidad preventiva en la lucha contra la corrupción, se enfrenta ante una serie de deficiencias que hacen infructuosos los esfuerzos de implementarlos. Esas deficiencias e manifiestan:

*En lo político*, la región enfrenta carencias o debilidades en el entramado legal institucional, lo que permite que se desenvuelva el fraude a gran escala; y por otra parte, existen grupos de poder que quieren hacer prevalecer su visión y sus intereses sobre la de los demás.

*En lo social*, la falta de una educación, los pocos o nulos espacios de participación comunitaria, la desconfianza y escasa solidaridad de la ciudadanía, generan indolencia y apatía en la sociedad.

Uno de los factores que no se puede perder de vista para entender la corrupción económica en América Latina, es la causa-efecto entre pobreza y corrupción, donde a mayor corrupción, mayor pobreza, y a mayor pobreza, mayor corrupción, lo que provoca un grave deterioro social que afecta derechos colectivos que inciden en un mayor grado de desigualdad.

Esto nos lleva a pensar en la relación estrecha que existe entre la corrupción y un entorno de exclusión social e ingobernabilidad, lo que provoca desasosiego en los ciudadanos de países en América Latina que atraviesan por una crisis de legitimidad de sus democracias, y como consecuencia devien en limitaciones a los derechos sociales, económicos y culturales; a eso se añade la impunidad y la ineficacia de las instituciones.

### **El caso Oderbrecht y la corrupción sistémica en latinoamérica**

Una investigación rutinaria de blanqueo de dinero iniciada el 17 de marzo de 2014 por la policía de Brasilia sobre una casa de cambio contigua a una estación de lavado de coches (Lava Jato) se convirtió en estos tres años en un auténtico tsunami contra la corrupción en America Latina. El epicentro pasó de la petrolera estatal Petrobras a la multinacional de la construcción Odebrech.

La constructora brasileña Odebrecht conquistó América Latina vendiendo grandes obras de infraestructura. Presente en 27 países, la empresa fundada por el ingeniero Norberto Odebrecht en los años cuarenta ha construido líneas de metro en Perú, centrales hidroeléctricas en Panamá, carreteras en Argentina, etc. Pero ese éxito tenía trampa. La empresa ha aceptado pagar 3.500 millones de dólares de multa, la mayor de la historia por sobornos, tras ser acusada de entregar 439 millones a políticos, partidos y funcionarios en al menos 12 países para garantizarse la adjudicación de obras públicas. [14]

El Departamento de Justicia de Estados Unidos, que investiga ramificaciones en su país, estimó que Odebrecht pagó US\$ 800 millones en sobornos durante una década hasta 2014. Además de Brasil, se han comprobado o están siendo investigadas coimas millonarias en Venezuela, República Dominicana, Panamá, Argentina, Perú, México, Colombia, Cuba, Honduras y Guatemala. A medida que el escándalo sigue ampliándose, en Brasil se esperan nuevas revelaciones explosivas, ya que la empresa, que ha admitido el pago de los sobornos, ha prometido dar más informaciones a la Justicia a cambio de reducción de penas a 77 de sus ejecutivos, que incluyen a su expresidente Marcelo Odebrecht, actualmente encarcelado. La empresa ha aceptado además pagar multas por más de US\$ 3.700 millones en Brasil, Estados Unidos, Suiza, República Dominicana y Panamá. [15]

En nueve países latinoamericanos, existe básicamente la misma historia con Odebrecht: se introducía uno de sus negociadores en las altas esferas políticas (de este tanto se acusa a Lula da Silva) y a puertas cerradas, “el hombre del maletín” ofrecía altos montos en sobornos para beneficiar la empresa con la adjudicación de contratos públicos por distintos tipos de obras, que posteriormente eran sobrevaluados por la empresa y así sustentaban esta cadena de corrupción permanente. [16]

Algunos de los países en que Odebrecht admitió haber pagado sobornos en América Latina son:

PAIS	PROYECTOS Y SOBORNOS
<b>Argentina</b>	En los 13 años de reinado de los Kirchner Odebrecht obtuvo contratos públicos por importe de unos 278 millones de dólares, por los que, según lo que ha trascendido de la delação do fim do mundo, habría pagado unos peajes de 35 millones.
<b>Brasil</b>	Caso Patrobras, se baraja la cifra de 6.400 millones de dólares esfumados, de los cuales 2.250 habrían ido a parar a Odebrecht, previo pago de 320 millones en sobornos a políticos como donaciones para campañas electorales.
<b>Colombia</b>	Odebrecht reconoce haber pagado 11 millones de dólares en sobornos para obtener contratos de obras públicas, se estima se beneficiaron con unos 50 millones de dólares. Parte de los cuales pudieron servir para financiar la campaña del presidente Santos en 2014. En enero fue detenido un ex alto cargo del gobierno de Uribe, acusado de haber recibido 6,5 millones de dólares. También han salido a la luz acusaciones contra la constructora brasileña de haber financiado a las Farc, algo que, obviamente sus directivos no admiten.

<b>Perú</b>	Las mordidas se cifran en 29 millones e implican en ellas a tres ex presidentes: Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Alan García. Al primero se le acusa de haber recibido 20 millones en sobornos y al segundo se le adjudican tres. El escándalo obligó al actual gobierno a cancelar el contrato de construcción del Gasoducto del Sur, presupuestado en 7.000 millones de dólares, la mayor inversión en infraestructuras de la historia del país, que había sido adjudicado a un consorcio encabezado por Odebrech.
<b>México</b>	La constructora brasileña reconoció haber pagado 10,5 millones de dólares en sobornos a «altos funcionarios de una empresa controlada por el Estado». Los representantes de la constructora brasileña admitieron en diciembre a las autoridades judiciales de Estados Unidos que el pago de coimas se hizo entre octubre de 2013 y finales de 2014 para ganar contratos con una compañía de la que no revelaron el nombre. Pemex, la petrolera paraestatal, anunció que revisará tres grandes contratos otorgados a Odebrecht, entre ellos la construcción al norte del país del gasoducto Los Ramones, de 450 kilómetros de longitud, y el acondicionamiento de un terreno donde se levantará la refinería de Tula, Hidalgo
<b>República Dominicana</b>	Las coimas ascendieron a 92 millones de dólares, Odebrecht se comprometió a pagar a lo largo de ocho años los 184 millones de dólares al estado dominicano en concepto de compensación por los sobornos que la compañía admitió haber pagado en el país para obtener contratos de obras públicas.
<b>Ecuador</b>	Funcionarios del Gobierno de Correa recibieron pagos por 33,5 millones entre los años 2007 y 2016. En la actualidad, la Fiscalía ecuatoriana ha pedido ayuda a España para tomar declaración a Rodrigo Tecla Durán, un abogado hispano-brasileño detenido en Pontevedra bajo la acusación de lavado de capitales, soborno de funcionarios y pertenencia a una organización criminal. Los sobornos se cuantifican en 59 millones, Odebrecht también ha cerrado un acuerdo verbal con las autoridades del país para pagar una indemnización por la trama de sobornos en el periodo 2010-2014 y colaborar en la investigación si es necesario. Según informó la Fiscal General panameña el pasado 12 de enero, la constructora brasileña pagará como reparación 59 millones de dólares.
<b>Panamá</b>	Los sobornos se cuantifican en 59 millones, Odebrecht también ha cerrado un acuerdo verbal con las autoridades del país para pagar una indemnización por la trama de sobornos en el periodo 2010-2014 y colaborar en la investigación si es necesario. Según informó la Fiscal General panameña el pasado 12 de enero, la constructora brasileña pagará como reparación 59 millones de dólares.
<b>Venezuela</b>	La cuantía de los sobornos se cifra en 98 millones de dólares como pago en información confidencial sobre los proyectos y para garantizar las adjudicaciones. Odebrech, según declaró en sede judicial uno de sus directivos financió la última campaña presidencial de Chávez, a través del publicista Joao Santana, asesor de imagen de Lula da Silva, Dilma Rousseff, Chavez y Nicolás Maduro. Este publicista fue condenado el pasado dos de febrero a ocho años de cárcel por blanqueo de dinero. Chávez le adjudicó a la constructora brasileña un total de 32 obras, de las cuales las cinco más importantes, de acuerdo a una investigación de la Asamblea Nacional, se adjudicaron en 16.000 millones de dólares y algunas acabaron con un sobreprecio siete veces superior al presupuesto inicial. El 80 % están sin terminar. Las más importantes son líneas de metro y ferrocarril que, según el diputado opositor Julio Montoya tienen un coste por kilómetro 300 veces superior a la media de otros países. El sobreprecio total lo cifra en

unos 1.000 millones de dólares. El escándalo en el caso de Venezuela es de tal magnitud que Maduro dio luz verde a la Fiscalía para investigar y nombró a su propio hijo, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, de 26 años, que desde enero ocupa la Dirección General de Delegaciones e Instrucciones Presidenciales, como supervisor e investigador de las obras inconclusas de Odebrech en Venezuela. La mas importante es el segundo puente del Lago de Maracaibo (puente Nigal) con un presupuesto 3.400 millones.
--

Fuente: Gigantesco lavadero coimero. El Observador. Febrero 14, 2017. <http://www.elobservador.com.uy/gigantesco-lavadero-coimero-n1031703>

Willians De Jesús Salvador. “La corrupción en América Latina”. CRÓNICA NEGRA N°1. 02/16/2017. <http://eljaya.com/opinion/20215-cronica-negra-la-corrupcion-en-america-latina>

CARLOS PAGNI. “La enfermedad de América Latina”. El Pais, 27 DIC 2016. [http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/26/actualidad/1482792310\\_600485.html](http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/26/actualidad/1482792310_600485.html)

Algunos países de la región no fueron mencionados directamente, sin embargo, existen indicios de su implicación. Por ejemplo no aparece Cuba, a pesar de que en agosto de 2015 se detectaron irregularidades en la construcción del puerto de Mariel, realizada por Odebrecht ,y tampoco Bolivia, donde cuatro de las cinco grandes constructoras brasileñas implicadas en el mayor caso de pago de sobornos de la región, participaron en al menos siete proyectos de infraestructura —seis de ellos estratégicos. [17]

Aunque en Chile no se ha destapado oficialmente ningún escándalo, sin embargo en marzo de 2017 la policía chilena ha registrado la sede de Odebrecht en Santiago, como parte de una investigación contra la constructora brasileña por pagar sobornos para conseguir obras públicas. [18]

Fuera de la región, en los países africanos, también admitió la empresa haber entregado sobornos por unos 50 millones de dólares en Angola y unos 900,000 dólares en Mozambique.

La autoincriminación de Odebrecht cobija infinidad de consecuencias. Las más inmediatas tienen que ver con la política. Los juicios y los procesos anticorrupción han caracterizado el escenario político y económico regional en los últimos tres años. Hasta el momento hay tres mandatarios latinoamericanos implicados en los sucios enjuagues de Odebrecht: de Perú, Colombia y Panamá. Y la lista sólo acaba de comenzar. El que está en la situación más difícil es el ex presidente peruano Alejandro Toledo. Un juez ha decretado contra Toledo, que se halla fuera del Perú en condición de prófugo, prisión preventiva de dieciocho meses mientras se investiga su caso; las autoridades peruanas han dado aviso a la Interpol.

En tres años de investigaciones, solo en Brasil han sido detenidas unas 200 personas, la mayoría ex altos cargos de Petrobras y directores de Odebrech y otras constructoras del país. La operación Lava Jato ya ha dado pie para la apertura de 57 procesos penales contra 260 acusados. Van celebrados 25 juicios en los que se han impuesto penas que suman más de 1.300 años de cárcel. [19]

De acuerdo a informes de la fiscalía hasta marzo de 2017 se tiene un balance de 130 condenas y 183 pedidos de cooperación judicial. La Justicia dictó 130

condenas contra 89 personas, contabilizando un total de 1362 años, 5 meses y 21 días de pena, y firmó 155 acuerdos de colaboración con personas físicas y diez de lenidad con empresas. En el marco de esos acuerdos, las autoridades recuperaron 10.000 millones de reales (unos 950 millones de dólares). [20]

De acuerdo con la Fiscalía, sólo los delitos denunciados en primera instancia contemplan pagos de sobornos de cerca de 6.400 millones de reales (unos 2.025 millones de dólares), mientras que el bloqueo de bienes de imputados alcanzó los 3.200 millones de reales (unos 1.010 millones de dólares).

La corrupción en torno a Petrobras, la mayor empresa de Brasil, creó un agujero en la petrolera de 42.000 millones de reales (unos 13.290 millones de dólares), teniendo en cuenta el beneficio obtenido por las empresas que formaban el cartel de obras. De acuerdo con los investigadores, durante una década las compañías pagaron sobornos a funcionarios públicos y políticos con el fin de garantizar los contratos con la estatal.

La Fiscalía también informó que desde 2014 fueron suscritos 183 pedidos de cooperación internacional, de los cuales 130 fueron realizados por Brasil y 53 fueron recibidos por parte de 24 países.

Este huracán judicial contra la corrupción que empezó en Brasil y avanza poco a poco hacia el norte del continente americano está arrojando unos resultados tan espectaculares por el empeño de jueces, fiscales, policías federales y agentes del Fisco que pueden realizar su trabajo gracias a que en el país todavía funciona la división de poderes. Una de sus armas decisivas es la Delação premiada, la versión brasileña del arrepentido y está claramente regulada en su legislación.

La historia de Odebrecht significa mucho más que el derrumbe de un coloso empresarial. La compañía había sido seleccionada para protagonizar un experimento geopolítico: la expansión del capitalismo brasileño a través de América Latina. Ese plan, que comenzó a concebirse en las postrimerías del Gobierno de Fernando Henrique Cardoso, cobró vuelo con los presidentes del PT: Luiz Inácio Lula da Silva, que en la contabilidad cifrada de Odebrecht figuraba como “amigo”, y Dilma Rousseff. La creación de la Unasur, respondió a esa ensoñación brasileña. [21]

Las confesiones de Odebrecht son un papel de tornasol para que aflore otro problema: la falta de transparencia que en toda a la región, desde México hasta la Argentina. Esa desviación perversa de recursos, que corroe la confianza en la política, contrasta con los niveles de pobreza. Si hasta los años ochenta el mal latinoamericano era el militarismo, hoy la enfermedad a superar se llama corrupción.

El escándalo de corrupción de Odebrecht no es el primero en el continente, pero se puede decir que es la primera vez que se conoce con tal riqueza de detalles una trama de esas proporciones con tentáculos internacionales. “Esta siempre ha sido la forma en que los políticos y empresarios han hecho negocios en la región”, afirma Peter Hakim, especialista en relaciones internacionales y presidente del think tank Inter-American Dialogue.

Las "delaciones premiadas" de Odebrecht abren una oportunidad soberbia a los países latinoamericanos para hacer un gran escarmiento contra los mandatarios

y ministros corruptos de las frágiles democracias que han reemplazado en la mayor parte de nuestros países (con las excepciones de Cuba y Venezuela) a las antiguas dictaduras. Nada desmoraliza tanto a una sociedad como advertir que los gobernantes que llegaron al poder con los votos de las personas comunes y corrientes aprovecharon ese mandato para enriquecerse, pisoteando las leyes y envileciendo la democracia. La corrupción es, hoy en día, la amenaza mayor para el sistema de libertades que va abriéndose paso en América latina luego de los grandes fracasos de las dictaduras militares y de los sueños mesiánicos de los revolucionarios. Es una tragedia que, cuando la mayoría de los latinoamericanos parece haberse convencido de que la democracia liberal es el único sistema que garantiza un desarrollo civilizado, en la convivencia y la legalidad, conspire contra esta tendencia positiva la rapiña frenética de los gobernantes corruptos. Aprovechemos las "delaciones premiadas" de Odebrecht para sancionarlos y demostrar que la democracia es el único sistema capaz de regenerarse a sí mismo. [22]

### **El retroceso de la región en el índice de percepción de la corrupción**

El problema de la corrupción en América Latina es bastante grave. Los niveles de corrupción son altos comparados a los de otras regiones en desarrollo y se está muy lejos de alcanzar los estándares de los países desarrollados en cualquiera de los indicadores de situación institucional.

El informe del Índice de Percepción de la Corrupción 2016 confirma que Latinoamérica está enfrentando uno de los peores momentos en materia de corrupción. La organización Transparencia Internacional identifica a la corrupción como uno de los problemas más perjudiciales para el crecimiento sostenido de las naciones y en su informe 2016 destaca el aumento de este flagelo en Latinoamérica. [23]

Aunque los indicadores de participación y rendición de cuentas (accountability) son mayores en América Latina que en el resto de los países en desarrollo, su situación no es mejor que la de los tigres asiáticos —que podrían ser un referente de interés para la región.

Tal vez uno de los problemas más serios en América Latina es que el "*respeto a las leyes*" es sorprendentemente bajo, incluso por debajo del nivel africano, lo que revela el grave problema de gobernabilidad. Dada la existencia de marcos regulatorios adecuados, el problema de la corrupción no parece provenir de la falta de leyes sino de su escasa aplicación. Ello es consistente con la virtual inexistencia de medidas de control de la corrupción en la región.

De acuerdo a los análisis de percepción de la corrupción de TI, hay bastante heterogeneidad en el nivel de corrupción de los países latinoamericanos. Sólo algunos países están en el rango de los países desarrollados, mientras que en otros la corrupción alcanza proporciones epidémicas sólo comparable a la de los países africanos. Los índices de corrupción de Chile y Costa Rica se encuentran dentro del rango de los países desarrollados, mientras que los niveles de Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Venezuela están entre los más altos del mundo. Por

otro lado, la inestabilidad política y la desigualdad social són factores determinantes de la corrupción y afectan severamente a la región.

La dimensión más grave de la falta de institucionalidad en la región es la ausencia de respeto a las leyes y la falta de medidas de control de la corrupción. América Latina pese a tener una vida independiente mucho más larga que la mayoría de los países en desarrollo, no ha podido ser capaz de consolidar gobiernos eficientes. Sólo Chile presenta niveles que lo ubican entre los más ineficientes de los países Desarrollados.

Por ello no es casual qué, entre las causas que inciden en el agravamiento de la corrupción en América Latina en el presente, Alejandro Salas, director para las Américas de Transparencia Internacional cite “la fragilidad institucional que es producto del control excesivo del poder y que no permite el desarrollo de los organismos encargados de controlar a los funcionarios de gobierno y la desigualdad que afecta a la región donde cada vez vemos más ricos y muchos más pobres son parte del problema”. [24]

El principal error que han cometido la mayoría de los países de América Latina después de la transición a la democracia, fue dejar de lado el trabajo para crear “buenos” sistemas de rendición de cuentas, fiscalización y combate a la corrupción. “Transitar a la democracia no es sólo escoger a los gobernantes, sino establecer buenos sistemas a través de los cuales éstos ejerzan bien el gasto, hagan bien sus funciones. Y si no pasa eso, debería haber un sistema que sancione lo que está mal. Ese trabajo no lo hicimos”. [25]

La agudización de la percepción de la corrupción en América Latina parece develar también un síntoma de debilidad en la relación “pública-privada”. En América Latina, la noción de corrupción con frecuencia suele asociarse a la administración pública, a políticos y gobernantes, pero en todos los grandes escándalos siempre hay uno o varios entes privados, en un matrimonio perverso con la política: están los temas de financiación de campañas, compra de congresistas para que aprueben determinados proyectos o compra de funcionarios públicos para que desvíen las licitaciones, etcétera.

Uno de los ejemplos más relevantes es Brasil, el caso Petrobras reveló la profundidad de la corrupción dentro del aparato del Estado y del partido de gobierno. La información habla de pérdidas por 2.000 millones de dólares solo por corrupción y describe un institucionalizado sistema de dineros mal habidos, diseñado para concluir en las arcas del PT. El círculo completo, esos dineros se usaron para financiar campañas electorales y comprar votos de diputados en el Congreso, el caso Mensalão. Así se construyó una aceitada maquinaria financiera para la perpetuación en el poder. [26]

Corrupción siempre ha habido, pero los escándalos de los últimos tiempos han reforzado la percepción de que el problema está desbordado. Es evidente que una corrupción baja, evidencia que hay un sistema judicial efectivo y que funciona sin miramientos, sin considerar quién es el infractor, lo que se traduce en una menor impunidad frente a la corrupción.

### III. LOS COSTOS ECONOMICOS DE LA CORRUPCION

Cuantificar los niveles de corrupción es una tarea compleja pues —aparte del secreto en el que ésta opera— no existe un indicador que sirva de denominador común para hacer comparaciones en el tiempo o entre países. Incluso si existiesen estadísticas oficiales sobre el volumen de actos o denuncias de corrupción, éstas podrían ser de escaso valor en la medida que los países difieren frecuentemente en su interpretación sobre cuáles actividades constituyen prácticas corruptas. Una medida monetaria, por otro lado, podría ser inadecuada porque en muchos países pobres la corrupción puede ser generalizada aun si los niveles de intercambio monetario son ínfimos comparados con los casos de gran corrupción en un país de ingreso medio o alto. [27]

Los impactos económicos de la corrupción se ramifican en muchas áreas del sistema económico. La primera área que se ve afectada son las decisiones de los productores respecto del esfuerzo productivo y el tipo de objetivos de producción que se persiguen. Adicionalmente, se distorsionan las decisiones de inversión y la producción de largo plazo. Una segunda área afectada es el funcionamiento administrativo del Estado, pues los funcionarios corruptos desarrollan mecanismos de preservación que erosionan la capacidad de gestión pública. Más aún, la corrupción incide en los procesos de toma de decisiones del Estado distorsionando la asignación de recursos.

*La corrupción distorsiona los incentivos con los cuales opera la empresa privada reduciendo la eficiencia económica.* Cuando se percibe la posibilidad de corromper a un funcionario público, hay un desvío de recursos desde actividades netamente productivas hacia aquellas denominadas de búsqueda de renta ('rent seeking'), las que no aumentan el bienestar de la sociedad. Así, los negocios más productivos no dependen de la competitividad de las empresas sino de su capacidad de influir en los responsables de tomar las decisiones respecto a la regulación o el destino de los fondos públicos.

*Es frecuente que en economías con alta corrupción se desarrollen y perpetúen estructuras monopólicas u oligopólicas en los mercados.* En particular cuando las economías son pequeñas o cerradas al comercio internacional. Adicionalmente, la corrupción deteriora el ambiente de negocios en el cual actúa el sector privado, lo que deriva en la búsqueda de ganancias rápidas y excesivas en momentos de incertidumbre (rentismo). En muchos casos, el rentismo ha significado un aumento en los niveles de endeudamiento de los países, con su consiguiente mayor costo en el servicio del crédito, en la medida en que los beneficios de actividades corruptas han sido depositados en el extranjero.

*Mercados que operan en ambientes marcados por la corrupción tienen incentivos a proveer bienes y servicios en cantidades insuficientes, de menor calidad o más costosos.* El costo de producción se encarece de manera directa cuando la corrupción se vuelve necesaria para adquirir un insumo productivo. Debido a que los "contratos" con sobornos no pueden ser reclamados a través del sistema judicial, existe un mayor riesgo y costo por cuanto un funcionario corrupto

puede negar el trato después de haber recolectado el soborno. Ello es reforzado por el hecho de que la corrupción se usa muchas veces para evitar regulaciones de calidad mínima o de condiciones de producción y venta seguras.

*La corrupción reduce el crecimiento económico al reducir los incentivos a la inversión.* Este mecanismo opera en varias formas. Primero, los negocios hechos sobre la base de sobornos son más riesgosos que los proyectos legales porque no hay derechos de propiedad legales y por lo tanto la cartera de inversiones de la economía tiene mayores niveles de riesgo del óptimo. Segundo, si los negocios se obtienen por conexiones o pagos ilegales, se desincentiva la entrada de potenciales empresarios a los mercados (en particular, los inversionistas extranjeros).

De hecho, la calidad de los potenciales entrantes se deteriora precisamente porque los únicos interesados son aquellos que tienen mayores habilidades para la corrupción y no los más eficientes. Tercero, los proyectos corruptos se convierten en competidores de, y frecuentemente desplazan a, los otros proyectos de inversión disponibles. En particular, las actividades de rentseeking se hacen relativamente más atractivas que los proyectos productivos que maduran más lentamente.

La evidencia empírica presentada por Paolo Mauro (1995) [28], basada en una muestra de 68 países en el período 1970-85, señala una *relación significativa y robusta entre mayor corrupción y menor inversión doméstica*. En términos cuantitativos, un país corrupto podría tener niveles de inversión hasta 5% del PIB menor que países sin corrupción, lo que se traduce, a su vez, en pérdidas de crecimiento de largo plazo de 0,5% del PIB por año.

De aquí se concluye que *la corrupción afecta negativamente el crecimiento económico* a través de su impacto sobre la inversión. Por otro lado, también se encuentra evidencia de que la corrupción reduce la inversión extranjera directa, actuando como un impuesto equivalente de hasta 20% sobre el retorno de un proyecto.

**En América Latina**, tomando como base distintos episodios de corrupción, es posible compartir algunas evidencias de países que han intentado cuantificar el impacto de la corrupción en el crecimiento económico en determinados períodos.

Sin embargo se debe dejar claro que esos intentos de aproximación apenas sirven de referencia para los decisores de políticas para la formulación de futuros programas de lucha contra la corrupción, antes que efectivos instrumentos de medición financiera.

A continuación presentamos algunos de los resultados de esas mediciones:

En lo que respecta a la **economía mundial**, una medición del FMI de 2007, sostiene que la corrupción en el sector público retira entre 1,5 y 2 billones de dólares al año del conjunto de la economía mundial y es capaz de generar costos mucho más altos al contener el crecimiento global, impedir una mayor recaudación pública y limitar la caída de los niveles de pobreza. El Fondo Monetario Internacional estima que esta lacra detrae cada año casi dos veces el PIB español [29].

Por su parte, las **economías en desarrollo y emergentes**, según el reporte de Integridad Financiera Mundial del 2015, perdieron 7,800 millones de millones de

dólares en flujos financieros ilícitos entre el 2004 y el 2013, con un aumento promedio de 6.5% al año, casi el doble del ritmo al que crece el PIB mundial.

La consultora estadounidense Global Financial Integrity, sostiene que la corrupción a **América Latina** le cuesta 142.920 millones de dólares anuales, lo que equivale al 3 por ciento de todo el producto bruto de la región. [30] De acuerdo a muchos analistas, este cálculo del GFI es probablemente una estimación conservadora porque se basa específicamente en el análisis de cifras oficiales de comercio y estadísticas de balanza de pagos, que no puede captar los fondos ilícitos de todas las organizaciones criminales.

De acuerdo con el cálculo de GFI, México y Brasil fueron los más afectados: en el periodo 2003-2012, México habría perdido poco más de 500 mil millones de dólares y Brasil casi 300 mil millones. La investigadora María Amparo Casar, en su libro *Anatomía de la Corrupción*, sostiene que el cálculo del costo real oscila entre 2 y 10 por ciento del Producto Nacional Bruto, o sea entre 26 mil millones y más de 130 mil millones de dólares por año.

Sea la cantidad que sea, el costo para los latinoamericanos parece demasiado alto, no sólo en lo económico sino en cuanto a gobernabilidad y hasta en lo político.

El costo de la corrupción en el **Paraguay** (de acuerdo al documental “*País íntegro, país digno*”), se presenta como parte del análisis del costo social de la corrupción, los perjuicios económicos, éticos y sociales que produce para la sociedad paraguaya y sus efectos. Se estima que el daño al Estado paraguayo es más de 7.000 millones de dólares sólo tomando los datos de los últimos 50 años. [31]

Otros intentos de medición se hacen a partir de estimaciones que dan cuenta sobre la evasión tributaria, la misma que oscilaría cerca del 50% de la potencial recaudación, en el sentido de que se recauda sólo la mitad de lo que debería recaudarse, y que el contrabando de exportación e importación de bienes de comercialización permitida ascendería a unos USD 5.000 millones anuales. Teniendo en cuenta que el contrabando asciende a USD 5.000 millones, se puede mencionar que el monto representa el 17 por ciento del Producto Interno Bruto de Paraguay (PIB) ya que en el 2013 la variable ha superado los USD 30 mil millones. [32]

En el **Perú**, un informe de la contraloría indica que al cierre del 2015 el costo de la corrupción bordearían fácilmente los 12,600 millones de soles solo ese año, sin contar lo que pierde el Estado por ineficiencia del sector público. Estas cifras alcanzan los 11 mil millones de dólares, que llegan a ser más del 8 por ciento del PBI del Perú; es decir, mucho más de lo que se invierte en temas tan importantes en nuestro país como es la Educación. [33]

Durante el período de los últimos siete años, se logró estimar que Perú pierde por corrupción anualmente 10.000 millones de soles (unos 3.000 millones de dólares) y sólo logró detectar la Contraloría tres mil millones de soles (unos 900 millones de dólares). Además, de acuerdo a cifras proporcionadas por la Contraloría, el costo de la corrupción “asciende alrededor de 1,6% del PBI más que la inversión en educación a nivel nacional. [34]

Solo en el 2013 el monto comprometido en actos de corrupción ascendió a nada menos que S/.10.000 millones, ese costo es el equivalente a 39 mil sueldos mínimos; dinero con el que podrían, tranquilamente, solucionarse problemáticas que viven a diario muchos peruanos.

**En Venezuela**, la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, señaló que sus investigaciones indican que Venezuela ha perdido US\$70 mil millones — casi el 16 por ciento de su producto interno bruto (PIB) en 2013, según datos del Banco Mundial— por la corrupción dentro de sus entes públicos. [35]

Una firma consultora económica citada en un informe de 2015 por el New York Times estimaba que se robaron US\$ 69.500 millones exclusivamente en fraude por importaciones entre 2002 y 2013.

El objetivo de Odebrecht para obtener información confidencial sobre proyectos y garantizarse concesiones. Según el detalle del caso abierto por la justicia norteamericana, en el caso de Venezuela, los pagos fueron de 98 millones de dólares a varios intermediarios que dijeron tener acceso directo a compañías públicas.

El dinero que los corruptos robaron en la **Argentina** es inconmensurable. Un trabajo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) estimó que entre 1980-2007, el país perdió unos 13 mil millones de dólares. El trabajo en aquél entonces se realizó en base a unas 750 causas de corrupción en el Estado. [36]

En el año 2005 la Procuración del Tesoro de la Argentina analizó 15 causas que involucraban delitos de corrupción superiores a los 100.000 dólares y encontró que sólo en tres de ellas los sobrepagos eran inferiores al 100%. Si el gasto en inversión pública ejecutado por el gobierno nacional promedió entre 2007 y 2015 un nivel de 12.500 millones de dólares al año, ¿es razonable pensar que el sobrepago promedio puede haber orillado un 20%? Si hubiera sido así, sólo sobrefacturando la inversión realizada por el gobierno nacional (sin las provincias ni los municipios) la corrupción en este rubro podría haber sumado 2500 millones de dólares al año. [37]

La dolarización de portafolios promedió unos 10.000 millones de dólares al año entre 2007 y 2015. Es difícil determinar si esos 2500 millones de dólares podrían haber sido parte de las partidas robadas, lo que sí es cierto es que se está muy probablemente en presencia de un fenómeno de impacto macroeconómico. La entrada al capital de YPF del Grupo Eskenazi (especialistas en mercados regulados), llevó a que YPF debiera aumentar su pago de dividendos hasta niveles extravagantes -de 2800 millones de dólares, en 2008, y de unos 1200 millones al año, entre 2009 y 2011- para que así el nuevo grupo accionista pudiera pagar el préstamo tomado para comprar "su" participación accionaria en la compañía. Durante ese período, un 25% de la salida de capitales explicado por el giro de utilidades al exterior fue generado por la supuesta entrada de los Eskenazi a YPF. La corrupción también puede afectar el nivel de las reservas internacionales del Banco Central.

Sólo en 2014 la corrupción le costó a **México** más de 20.000 millones de dólares, indica un análisis del Observatorio Económico México. Este nivel de corrupción representó 15% de la inversión pública de 2014.

La corrupción es una práctica que se mantiene por las fallas e ineficiencias de los sucesivos gobiernos en México, y su costo equivale a 9 por ciento del producto interno bruto mientras las empresas erogan hasta 10 por ciento de sus ingresos en sobornos, conforme a lo que aseguran directivos empresariales y del Foro Económico Mundial (FEM).

De acuerdo a mediciones del Observatorio Económico de México, un aumento de 10% en la percepción de corrupción en México, genera una pérdida del valor en pesos del Producto Interno Bruto (PIB) del país de 2%.

Entre 1998 y 2009 la corrupción del país costó aproximadamente 146 mil 628 millones de pesos al año, más de seis veces el presupuesto de la UNAM para el año (23 mil 410 millones de pesos); o bien, 11 mil 266 millones de dólares anuales, mismos que se traducirían en un incremento potencial del 1.675 por ciento del Producto Interno Bruto. [38]

Según proyecciones de OG Asociados, el impacto de la lucha contra la corrupción en **Brasil** puede estimarse en cerca de 3,6 puntos porcentuales del PIB, sumando los efectos directos, indirectos y en el nivel de renta de los centenares de miles de empleados de esas firmas.

Tan solo el escándalo de PETROBRAS, que otorgaba concesiones de obras de manera discreta, generó una distribución de comisiones en torno a un 3% del valor del contrato entre funcionarios, políticos y demás entes involucrados, descapitalizando la empresa pública, en favor de empresas privadas. El caso Petrobras revela la profundidad de la corrupción dentro del aparato del Estado y del partido de gobierno. La información habla de pérdidas por 2.000 millones de dólares solo por corrupción y describe un institucionalizado sistema de dineros mal habidos, diseñado para concluir en las arcas del PT. Esos dineros se usaron para financiar campañas electorales y comprar votos de diputados en el Congreso, “el caso Mensalão”. Así se construyó una aceitada maquinaria financiera para la perpetuación en el poder. [39]

Según la investigación en torno a la causa abierta que afecta a la petrolera estatal brasileña Petrobras se calcula que de los 20.000 millones de reales (6.400 millones de dólares) desviados, 7.000 (2.250 millones de dólares) fueron a parar a *Odebrecht*. Se cree que la multinacional accedió a esa fuente de dinero pagando hasta 1.000 millones de reales (320 millones de dólares) en sobornos a políticos y otros agentes públicos, generalmente en forma de donaciones para campañas electorales. [40]

La mayor investigación de corrupción de la historia de Brasil “la operación Lava Jato (lavadero de autos)”, que investiga desde el año 2014 la corrupción en el país, ha obligado a cancelar 16 proyectos de infraestructura previstos y suspender la financiación de 3600 millones de dólares en seis países latinoamericanos.

La paralización de las mayores constructoras de Brasil involucradas en la corrupción tienen un alto costo en 2015 más del 2% del PIB. Según las cuentas de la GO Asociados dejaron de circular en Brasil 150 billones de dólares

(aproximadamente 45 billones de dólares) por la caída brusca de la falta de inversiones de Petrobras. Tan solo la acción policial y judicial sobre la corrupción en Petrobras costó el 1% del producto bruto del país, equivalente a unos US\$20.000 millones.

Otro episodio que se investiga se refiere a la construcción el estadio de la Copa del Mundo en Brasilia que ha triplicado su costo en fondos públicos debido en gran medida a facturación fraudulenta. De acuerdo a los auditores del gobierno, el estadio de Brasilia costará ahora unos 900 millones de dólares. En un informe de 140 páginas sobre el estadio, los auditores hallaron unos 275 millones de dólares en presuntos excesos de facturación. Y eso que han examinado solo tres cuartas partes del proyecto. Pronostican que una tercera parte de los costos se pueden atribuir a sobrepagos, la mayor porción de los 500 millones en gastos sospechosos que los auditores han alertado en relación con proyectos de construcción del Mundial. [41]

El costo general de los 12 estadios, cuatro de los cuales los críticos dicen que se convertirán en elefantes blancos después del torneo porque las ciudades no los pueden mantener, se ha disparado a 4.200 millones de dólares en términos nominales, casi cuatro veces el estimado en un documento de la FIFA de 2007 publicado pocos días antes que Brasil fuera elegida sede del Mundial.

**Panamá** anualmente pierde por la corrupción aproximadamente 800 millones de dólares, en los últimos cinco años 4 mil millones de dólares y en los últimos 20 años, 10 mil millones de dólares. Las cifras anteriores revelan que esa cantidad sería equivalente a dos expansiones del Canal de Panamá, seis líneas del metro, 11 puentes sobre el Canal, la renovación de 3 mil escuelas públicas, 2 mil centros de salud y 200 mil viviendas públicas. [42]

De acuerdo a TI, en un estudio que recoge los 10 casos de corrupción más sonados en la pasada administración en Panamá, revela que la lesión patrimonial registrada es por 190 millones de dólares.

En **Colombia** se estima que la corrupción le ha costado al país, en dos décadas, cerca de 189 billones de pesos, un 4% del PIB durante el 2015. De acuerdo a Transparencia de Colombia, los efectos de esta no solamente son en términos de la pérdida de recursos, sino sociales y políticos: afecta la calidad de vida de los ciudadanos, la credibilidad y legitimidad de las instituciones. [43]

La corrupción ya en 2013 le ha costado a la economía colombiana cerca de 800 millones de dólares, según un balance presentado por la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha Contra la Corrupción (Cnclc). Los indicadores de percepción de corrupción en el país siguen siendo negativos, los resultados del Barómetro Global de la Corrupción reflejaron que la impunidad y lentitud en los procesos judiciales y la falta de mecanismos fuertes de denuncia y protección a denunciantes siguen incidiendo en este fenómeno. [44]

Un cuadro mas completo del costo de la corrupción en 20 países de America Latina realizado por Global Financial Integrity por el periodo 2003-2013, nos muestra que la pérdida agregada para la región latinoamericana por corrupción se aproxima a los 1215.5 Miles de millones de dólares.

**Ranking de Global Financial Integrity sobre el costo de la corrupción en países de América Latina en el período 2003-2012**

	<b>PAIS</b>	Miles de millones de dólares
1	México	514.3
2	Brasil	217.1
3	Costa Rica	94.0
4	Aruba	82.4
5	Panamá	48.5
6	Chile	45.6
7	Paraguay:	37.0
8	Venezuela	36.8
9	Honduras	32.9
10	Trinidad y Tobago	32.1
11	Ecuador	16.4
12	Bahamas	16.3
13	Nicaragua	15.1
14	Argentina	14.1
15	Colombia	12.1
16	República Dominicana	12.1
17	Guatemala	11.8
18	Perú	9.0
19	Uruguay	8.5
20	El Salvador	7.9

Algunas conclusiones generales del impacto económico de la corrupción sobre el crecimiento del PIB pueden formularse tomando como base las numerosas investigaciones teóricas y empíricas realizadas por organismos especializados. La mayor parte de estos estudios legan a las siguientes conclusiones:

--La corrupción se ha generalizado, pero hay variaciones considerables entre regiones y dentro de éstas.

--La corrupción aumenta los costos de transacción y la incertidumbre en una economía.

-- La corrupción suele llevar a resultados económicos poco eficaces. Impide las inversiones extranjeras e internas a largo plazo, desvía el talento hacia

actividades de captación de rentas y distorsiona las prioridades sectoriales y las elecciones tecnológicas (por ejemplo, creando incentivos para contratar grandes proyectos de defensa en lugar de dispensarios rurales especializados en atención preventiva). Expulsa a las empresas del sector formal, menoscaba la capacidad del Estado para obtener ingresos y produce un aumento incesante de los impuestos, que paga un número cada vez menor de contribuyentes. Todo ello reduce la capacidad del Estado para prestarservicios públicos indispensables, incluido el ordenamiento jurídico. Puede producirse un círculo vicioso de aumento de la corrupción y actividad económica informal.

-- La corrupción es injusta. Impone un gravamen regresivo que afecta particularmente a las actividades comerciales y los servicios de pequeñas empresas.

--La corrupción menoscaba la legitimidad del Estado.

Se ha afirmado que, en algunas circunstancias, la corrupción puede tener efectos positivos al dar a empresas y personas físicas un medio de eludir reglamentos engorrosos y sistemas jurídicos ineficaces. Pero este argumento pasa por alto el enorme poder discrecional que tienen muchos políticos y funcionarios (particularmente en sociedades corruptas) en cuanto a la creación y la interpretación de reglamentaciones contraproducentes. En lugar de ser el "lubricante" del engranaje de una administración rígida, la corrupción promueve el aumento de reglamentaciones excesivas y discrecionales. El argumento de que la corrupción puede aumentar la eficacia reduciendo el tiempo necesario para tramitar permisos también es dudoso. [45]

### **Las incidencias de la corrupción en el desarrollo económico y social**

La corrupción es un flagelo que tiene una relación directa con la economía de los países, pues de acuerdo con los múltiples estudios realizados, las naciones en vías de desarrollo presentan niveles mucho más elevados que las industrializadas, que no significa que haya una "cultura de la corrupción" en estos países, sin embargo, estos índices son más altos en esas naciones porque los sistemas políticos y económicos en vez de combatirla, lo que hacen es favorecerla.

Los actos de corrupción alejan la inversión y como consecuencia evita que se produzcan nuevas fuentes de empleos. Un informe del Banco Mundial revela que la corrupción provoca que el costo de los grandes proyectos aumente en un 25% para los empresarios que desean invertir sus capitales. Igualmente, señaló que la corrupción, además de minar las instituciones democráticas, afecta la credibilidad de los políticos y que esa situación de incredulidad le afecta al momento de adoptar decisiones costosas, por tanto también afecta la credibilidad. Acotó que el funcionamiento de la justicia, un estado de derecho que funcione y un Organismo Judicial independiente, es crucial para combatir la corrupción. [46]

América Latina por causa de la corrupción pierde varios puntos del PIB, crea menos empleo, tiende a bajar los niveles de productividad y reduce la inversión en el país de manera significativa por montos cercanos al 5%. [47] Todo esto se traduce en reducción del bienestar de los hogares, por menores ingresos y

también porque la corrupción y la impunidad suelen venir acompañadas de la violencia. El documento: "México: Anatomía de la corrupción" [48], señala como países con alta corrupción en Latinoamérica a: Venezuela, Argentina, México, Panamá, Colombia, Brasil, Costa Rica y Chile, y aunque si bien la corrupción es un fenómeno multifactorial, se ha observado la relación de causalidad entre PIB per cápita y nivel educativo por un lado, y los niveles de percepción sobre la corrupción, por el otro. Esto es, los países con PIB per cápita más alto son menos corruptos, así como que a menor nivel educativo, mayor percepción de corrupción.

Por último, otro costo importante está en la crisis de representación y la insatisfacción con la democracia como sistema político, pues, según encuestas como Latinobarómetro, la población desconfía de los partidos políticos, del Poder Legislativo y del sistema judicial. [49]

Tomando en cuenta la definición de corrupción como "utilización de un cargo público en beneficio propio", hemos de tener presente que los altos beneficios económicos que obtienen los corruptos en América Latina generan un *sobrepeso* en las obras o servicios públicos, lo cual supone un verdadero impuesto implícito que pagan los ciudadanos. En muchos países, además, las decisiones corruptas de concesión de tales obras o servicios van acompañadas de una falta absoluta de control de la *calidad* (en materiales o especificaciones técnicas, por ejemplo) o de la *seguridad* (física, sanitaria, etcétera).

Por otra parte, en ocasiones los gobiernos han financiado de forma injustificada *megaproyectos* enormemente costosos para el erario público que no tienen la mínima rentabilidad económica o social exigible.

Es una práctica observable en la región que la corrupción genera grandes cantidades de dinero *opacas*, que incrementan la *economía sumergida*, lo cual viene a reducir sensiblemente los ingresos públicos, originando así una mayor carga fiscal sustitutoria para el conjunto de los contribuyentes. Además, tales cantidades se destinan muy frecuentemente a nutrir los *paraísos fiscales*, verdadera vergüenza internacional, muchos de los cuales pertenecen o están bajo la soberanía de países desarrollados. Aunque en los índices de corrupción que publica Transparencia Internacional se muestran los países más corruptos (normalmente entre los más pobres), no hay que olvidar que una gran parte del dinero corrupto generado en esos países es colocado y recibido por los paraísos fiscales bajo bandera de los países ricos. [50]

Otro efecto perverso de la corrupción en la región que la misma impide la libre competencia y las reglas del juego democráticas, generando importantes ineficiencias y costes económicos, de confianza, etcétera, y reduce ostensiblemente la efectividad y calidad de las políticas económicas.

De cualquier forma, los costes más importantes de la corrupción para los países de América Latina quizá sean justamente los que no se ven, los *costes de oportunidad*, o en definitiva, *lo que se deja de ganar*. Cada vez más, la corrupción ahuyenta a los potenciales inversores, en primer lugar, por razones *éticas*, ya que hay un creciente número de fondos de inversión y empresas con planteamientos o códigos éticos, que eluden cualquier vestigio o riesgo de corrupción; y también por razones *pragmáticas*, puesto que en los países y entornos corruptos siempre existe

el riesgo de futuros problemas legales o judiciales, o incluso políticos que pueden perjudicar arbitrariamente, limitar o incluso expropiar o hacer perder tales inversiones (algunos estudios indican que en los países corruptos hay una alta probabilidad de perder la inversión en un plazo de cinco años).

Latinoamérica en el 2015, es la región que más ha alejado inversiones por la percepción de corrupción de los empresarios, según el último informe anual de fraude de Kroll. El documento anual de Kroll que reúne más de 700 altos ejecutivos, reveló que el 72% de las compañías multinacionales encuestadas fueron disuadidas de operar en un país o una región particular justamente por la percepción que los mismos tienen sobre los niveles de fraude y corrupción que prevalecen en estos mercados. [51]

## CONCLUSIONES

La lucha contra la corrupción es un camino largo y que recién está empezando a recorrer la región latinoamericana. Este será el terreno en donde se va a jugar la calidad de la democracia en el futuro. La agenda regional tiene, además, por delante mucho retos: el fortalecimiento institucional, la desaceleración económica, la desigualdad social y, sobre todo, la lucha contra la corrupción. [52]

Las crisis que se están viendo en varios países reafirman la existencia de una asignatura pendiente en el proceso democrático de América latina: el de la **baja calidad institucional**. Más allá de la heterogeneidad que caracteriza a América Latina, existe una generalizada debilidad institucional. Para seguir avanzando en una democracia de mejor calidad se necesita modernizar y fortalecer las instituciones.

América Latina está viviendo una crisis de representación política, pero el tema central en esta etapa de la profundización democrática pasa por el fortalecimiento de la justicia y los mecanismos de control. Es un elemento central dentro de las reformas de segunda generación que la región debe poner en marcha. Se necesita un poder judicial independiente con órganos de control y fiscalización. La democracia requiere conciliar la demanda de mayor transparencia, acceso a la información pública, un fuerte compromiso y lucha frontal contra la corrupción y sobre todo contra la impunidad. *Corrupción hay en muchos países, pero lo grave en nuestra región es la impunidad frente a la corrupción.*

Además de los perjuicios económicos, y ya en una medición de los **efectos políticos**, la existencia de numerosos indicios de corrupción en los cargos públicos ha generado una amplia desconfianza en la clase política y una sensación de *impunidad* que hace que los ciudadanos se alejen cada vez más de los políticos, y lo que es peor, tengan una sensación de *fatalismo* y una cierta creencia de que los políticos *son todos iguales*, lo cual evidentemente no es cierto, aunque cuesta convencerles de lo contrario.

*La corrupción del sistema político* es el frente mas visible del agravamiento de los efectos económicos de la corrupción. Las causas parecen encontrarse en el frágil desarrollo de los sistemas políticos ó en la desnaturalización de los mismos.

Algo que resalta en todos los análisis es que en los países en desarrollo y particularmente en América Latina no existe una cultura de pesos y contrapesos (checks and balances) que promueva un ejercicio adecuado y vigilado de la autoridad pública. Tampoco existe la noción de que los funcionarios públicos deban dar cuenta de su desempeño (accountability) y tampoco ellos están sujetos a la remoción por desconfianza (recall). En un régimen democrático, la creación de una institucionalidad en la que estos tres conceptos se apliquen de manera sistemática dependerá de “*la voluntad de los políticos*”. A ellos les cabe, además, una responsabilidad particular, pues esta “voluntad” les significa usualmente una disminución importante de su propio poder en beneficio de la comunidad.

La experiencia demuestra que para abordar el problema de la corrupción el compromiso de los políticos es fundamental. En aquellas sociedades donde no existe este compromiso, la corrupción se institucionaliza. En muchas ocasiones, las agencias anticorrupción creadas con gran alboroto público, ven sus fondos reducidos y su independencia coartada cuando tratan de llevar a cabo su mandato. Por ello, es necesario que los planes anticorrupción consideren reformas institucionales que fortalezcan desde un punto de vista constitucional a las agencias o entidades que tienen a su cargo las medidas anticorrupción. [53]

Quizás las consecuencias de la corrupción en el ámbito político son más conocidas en latinoamérica. La ciudadanía de los países ha ido observando cómo el Estado ha ido perdiendo su rol de mediador de conflictos sociales convirtiéndose en un aparato que sirve a grupos específicos, con frecuencia de las élites tradicionales de la economía y la política.

Raimundo Soto en su trabajo “la corrupción desde una perspectiva económica” determina el *impacto político de la corrupción* en los siguientes tres aspectos. [54]

*La corrupción reproduce y consolida la desigualdad social y preserva las redes de complicidad entre las élites políticas y económicas.* La desigualdad económica y política se refuerza al producir una asignación socialmente injusta de los bienes y servicios provistos por el Estado. La clase política consolida su accionar sobre la base del clientelismo olvidando su papel como intérprete de las necesidades de toda la sociedad. Cuando la corrupción se generaliza, se deslegitima el sistema político.

*La corrupción mina la legitimidad de los gobiernos.* Cuando los funcionarios públicos persiguen sus propios intereses entran en conflicto rápidamente con los intereses de la sociedad y de la gestión pública. Ello produce un desbalance de autoridad entre instituciones públicas, en primera instancia, y entre el Estado y la sociedad civil, en segunda instancia. Estos conflictos llevan a deslegitimar el gobierno y, en el caso extremo, a la desobediencia civil y violencia que caracteriza muchos regímenes latinoamericanos.

*Un corolario frecuente de la delegitimización política es el populismo y la aparición, típicamente fugaz, de caudillos redentores.* Además, se desincentivan las decisiones políticamente costosas. La corrupción hace posible que se institucionalice la ilegalidad. Esto conduce inevitablemente a litigios y cargos calumniosos por lo cual hasta funcionarios honestos pueden ser chantajeados.

Adicionalmente, la corrupción desgasta los valores democráticos y la igualdad política, porque discrimina en contra de los grupos más pobres que no pueden pagar sobornos a los funcionarios corruptos. La corrupción alimentan asimismo una competencia política desigual. La acumulación de recursos que generan los tratos espurios con el Estado nutre a los grupos políticos detrás de esas prácticas, esto le da ventaja a quien ejerce el poder y maneja los recursos, contribuyendo a perpetuarle, y erosiona la democracia entendida como una competencia de liderazgos y de propuestas de políticas y de cambio institucional. [55]

En el **ámbito social**, la prevalencia prolongada de prácticas corruptas en el Estado y de un ejercicio clientelista del poder en varios países ha generado desmovilización social. La movilización es un componente crítico en la construcción de instituciones y políticas para el bienestar, no sólo porque canaliza aspiraciones y demandas sino porque contribuye a crear base social para la construcción de nuevos arreglos productivos y distributivos. Pero en la medida en que la corrupción y el clientelismo aparecen como inamovibles, la acción colectiva pierde incentivo y motivación.

**En resumen**, los costes y efectos económicos de la corrupción son demasiado importantes para que la comunidad internacional (países, organismos nacionales e internacionales, sociedad civil, etcétera) y los ciudadanos de los países de América Latina se nos mantengan de brazos cruzados ante esta *lacra* social, alarmante y demasiado consentida, que lamentablemente impregna tantas instituciones, empresas y colectivos de esta aldea global.

Aunque la solución de este importante problema resulta harto complicada, una forma de atajarlo al menos radica en impulsar firmemente la *transparencia*, la cual constituye indudablemente el mejor *antídoto* contra la corrupción. Cuanto mayor es la información que se genera y se divulga por parte de las instituciones y cargos públicos, menos margen hay para la corrupción. En esta cultura de la transparencia resulta fundamental la educación de los ciudadanos, para que ya desde niños puedan aprender a valorar adecuadamente la importancia de la transparencia social y lo perverso o negativo de la corrupción. En esto tenemos un importante papel los enseñantes (en colegios, institutos y universidades), así como las organizaciones de una sociedad civil activa, participativa, y no conformista.

En definitiva, aumentar el nivel de transparencia social y combatir decididamente la corrupción es una importante *asignatura pendiente* y sin duda uno de los más importantes desafíos para esta sociedad del siglo XXI.

## LITERATURA

[1] Frédéric Boehm. “Cómo afecta la corrupción el desarrollo económico?”. REDACCIÓN ELHERALDO.CO. 11 de Agosto de 2012

[2] Rogelio Núñez . “América Latina: la corrupción de norte a sur”. <http://www.infolatam.com/2015/03/08/corrupcion/>

[3] Corrupción un pesado lastre para América Latina. EL TIEMPO, 14 de mayo de 2016. <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16593187>

- [4] HÉCTOR E. SCHAMIS. “La corrupción de nuevo” . 10 ABR 2016.EL PAIS.  
[http://internacional.elpais.com/internacional/2016/04/09/actualidad/1460237527\\_346259.html](http://internacional.elpais.com/internacional/2016/04/09/actualidad/1460237527_346259.html)
- [5] Claudio Paolillo. “Chau querida”. 17 AL 30 DE MARZO DE 2016.  
<HTTP://WWW.BUSQUEDA.COM.UY/NOTA/CHAU-QUERIDA>
- [6] Carlos Mario Gómez G.. “El Análisis Económico de la Corrupción”.  
Universidad de Alcalá
- [7] Vitor Gaspar y Sean Hagan. “Corrupción Una carga oculta sobre el crecimiento FMI”. November 10, 2015. [http://blog-dialogoafondo.org/?page\\_id=4533](http://blog-dialogoafondo.org/?page_id=4533)
- [8] Corrupción un pesado lastre para América Latina. EL TIEMPO, 14 de mayo de 2016. <http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/cifras-de-la-corrupcion-de-america-latina/16593187>
- [9] Raimundo Soto. La corrupción desde una perspectiva económica. Estudios Públicos, 89 (verano 2003).
- [10] Carlos Mario Gómez G.. “El Análisis Económico de la Corrupción”.  
Universidad de Alcalá. <http://www3.uah.es/econ/Ensayos/Corrupcion03.pdf>
- [11] Kimberly Ann Elliott. “La corrupción en la economía global”. Editorial LIMUSA, Mexico, 2001
- [12] Willians De Jesús Salvador. “La corrupción en América Latina”. CRÓNICA NEGRA N°1. 02/16/2017. <http://eljaya.com/opinion/20215-cronica-negra-la-corrupcion-en-america-latina>
- [13] Kevin Casas Zamora y Miguel Carter. “La corrupción que sacude nuestras democracias”. 07/04/2016 -Clarín.com. [http://www.clarin.com/opinion/corrupcion-sacude-democracias\\_0\\_4krQ4P0Rg.html](http://www.clarin.com/opinion/corrupcion-sacude-democracias_0_4krQ4P0Rg.html)
- [14] GIL ALESSI. “Odebrecht revela la corrupción sistémica en Latinoamérica”. EL PAIS, São Paulo, 4 ENE 2017.  
[http://internacional.elpais.com/internacional/2017/01/04/america/1483488807\\_369388.html](http://internacional.elpais.com/internacional/2017/01/04/america/1483488807_369388.html)
- [15] Gigantesco lavadero coimero. El Observador. Febrero 14, 2017.  
<http://www.elobservador.com.uy/gigantesco-lavadero-coimero-n1031703>
- [16] Willians De Jesús Salvador. “La corrupción en América Latina”. CRÓNICA NEGRA N°1. 02/16/2017. <http://eljaya.com/opinion/20215-cronica-negra-la-corrupcion-en-america-latina>
- [17] Wálter Vásquez . “Cuatro constructoras de Lava Jato participaron en 7 obras en Bolivia” . La Razón (Edición Impresa) / La Paz. 19 de marzo de 2017
- [18] El caso de los sobornos de Odebrecht salta a Chile y afecta ya a 12 países. Santiago de Chile 2 MAR 2017.  
[http://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/02/actualidad/1488436917\\_054658.html](http://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/02/actualidad/1488436917_054658.html)
- [19] JULIO Á. FARIÑAS . “Odebrecht el epicentro de la corrupción en America Latina”. La voz de galicia, 19/03/2017.  
<http://www.lavozdeg Galicia.es/noticia/internacional/2017/03/19/odebrecht-epicentro-corrupcion-america-latina/00031489878459205620727.htm>
- [20] Brasil el Lava Jato cumplió tres años con un balance de 130 condenas por corrupción. INFOBAE, 18 de marzo de 2017.

- <http://www.infobae.com/america/america-latina/2017/03/18/el-lava-jato-cumplio-tres-anos-con-un-balance-de-130-condenas-por-corrupcion/>
- [21] CARLOS PAGNI. “La enfermedad de América Latina”. El País, 27 DIC 2016. [http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/26/actualidad/1482792310\\_600485.html](http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/26/actualidad/1482792310_600485.html)
- [22] Mario Vargas Llosa. “El escándalo de Odebrecht le hace bien a América latina”. LA NACION, 20 DE FEBRERO DE 2017. <HTTP://WWW.LANACION.COM.AR/1986078-EL-ESCANDALO-DE-ODEBRECHT-LE-HACE-BIEN-A-AMERICA-LATINA>
- [23] Índice de Percepción de la Corrupción 2016 de Transparency International. IPC 2016. <http://transparencia.org.es/ipc-2016/>
- [24] Gioconda Tapia Reynolds. “Corrupción es un problema sistémico en América Latina”. VOA noticias, Washington, DC, febrero 23, 2017. <http://www.voanoticias.com/a/transparencia-internacional-corrupcion-latinoamerica-alejandro-salas/3736766.html>
- [25] Gerardo Villafranco. “América Latina resiente más el problema de la corrupción”. FORBES Economía y Finanzas. 01 Abril 2017. <https://www.forbes.com.mx/america-latina-resiente-mas-problema-la-corrupcion/#gs.hU=BSCI>
- [26] HÉCTOR E. SCHAMIS. “El régimen político de la postdemocracia latinoamericana”. 25 ABR 2015 - CEST. <HTTP://AMERICANUESTRA.COM/CORRUPCION-EL-REGIMEN-POLITICO-DE-LA-POSTDEMOCRACIA-LATINOAMERICANA/>
- [27] Raimundo Soto. La corrupción desde una perspectiva económica. Estudios Públicos, 89 (verano 2003).
- [28] Paolo Mauro. “Corruption and Growth”. Q J Econ (1995) 110 (3): 681-712. DOI: <https://doi.org/10.2307/2946696>, Published: 01 August 1995
- [29] Costo de la corrupción en el mundo. 12 de mayo, 2016 - <http://www.eluniverso.com/noticias/2016/05/12/nota/5574225/costo-corrupcion-mundo>
- [30] JOSÉ CARREÑO FIGUERAS. “La corrupción le cuesta cara a América Latina”. 09/08/2015. <http://www.excelsior.com.mx/global/2015/08/09/1039178>
- [31] 7000 millones de dólares es el costo de la corrupción en Paraguay. <http://ea.com.py/v2/7000-millones-de-dolares-es-el-costo-de-la-corrupcion-en-paraguay/>
- [32] El múltiple impacto de la corrupción. 20 de Noviembre, 2014. <http://www.paraguay.com/nacionales/el-multiple-impacto-de-la-corrupcion-119455>
- [33] Así está el Perú 2016 Los costos de la corrupción. 23 de marzo del 2016. <http://rpp.pe/politica/elecciones/asi-esta-el-peru-2016-los-costos-de-la-corrupcion-noticia-947560>
- [34] Perú pierde \$ 3.000 millones anuales por corrupción, estima Contraloría. AFP 8 de marzo, 2016. <http://www.eluniverso.com/noticias/2016/03/18/nota/5472297/peru-pierde-3000-millones-anuales-corrupcion-estima-contraloria>

- [35] Corrupción generalizada en Venezuela le pasa factura al presidente Maduro. Tristan Clavel y David Gagne, 24 Octubre 2016. <http://es.insightcrime.org/analisis/corrupcion-generalizada-venezuela-pasa-factura-presidente-maduro>
- [36] El costo de la corrupción en Argentina. Walter Schmidt. <http://opinion.infobae.com/walter-schmidt/2015/09/28/el-costo-de-la-corrupcion-en-argentina/>
- [37] El costo oculto de la corrupción. Nicolás Dujovne. LA NACION. JUEVES 21 DE ABRIL DE 2016. <http://www.lanacion.com.ar/1891201-el-costo-oculto-de-la-corrupcion>
- [38] El costo de la corrupción en México equivale a 9% del PIB, afirma el FEM. JULIO REYNA QUIROZ. Periódico La Jornada. Martes 13 de abril de 2010. <http://www.jornada.unam.mx/2010/04/13/economia/023n2eco>
- [39] BRASIL: EL COSTO DE LA CORRUPCIÓN. Edgar Moreno - 14-Feb-2016. <http://www.cartafinanciera.com/latinoamerica/brasil-el-costo-de-la-corrupcion>
- [40] Qué es el ‘caso Odebrecht’ y cómo afecta a cada país de América Latina. ANTONIO JIMÉNEZ BARCA. São Paulo 9 FEB 2017. [http://internacional.elpais.com/internacional/2017/02/08/actualidad/1486547703\\_321746.html](http://internacional.elpais.com/internacional/2017/02/08/actualidad/1486547703_321746.html)
- [41] Mundial Brasil 2014: Corrupción y altos costos salen a la luz. 13 DE MAYO DEL 2014. <http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/mundial-brasil-2014-corrupcion-y-altos-costos-salen-luz-noticia-1729072>
- [42] Analistas advierten: La corrupción en Panamá impacta el futuro de los más pobres. [http://www.tvn-2.com/nacionales/judicial/corrupcion-Panama-futuro-pobres\\_0\\_4299320085.html](http://www.tvn-2.com/nacionales/judicial/corrupcion-Panama-futuro-pobres_0_4299320085.html)
- [43] La corrupción le cuesta al país 4% del PIB. 20 de Septiembre de 2015. <https://www.elheraldo.co/economia/la-corrupcion-le-cuesta-al-pais-4-del-pib-218319>
- [44] La corrupción le costó a la economía colombiana 800 millones de dólares en 2013. 10 DE DICIEMBRE DE 2013. [http://www.elcolombiano.com/historico/la\\_corrupcion\\_le\\_costo\\_a\\_la\\_economia\\_colombiana\\_800\\_millones\\_de\\_dolares\\_en\\_2013-EAEC\\_273474](http://www.elcolombiano.com/historico/la_corrupcion_le_costo_a_la_economia_colombiana_800_millones_de_dolares_en_2013-EAEC_273474)
- [45] CHERYL W. GRAY Y DANIEL KAUFMANN. “Corrupción y desarrollo”. Finanzas & Desarrollo / Marzo de 1998
- [46] Corrupción afecta desarrollo económico. Nación - 25/3/04 -. <http://m.panamaamerica.com.pa/content/corrupti%C3%B3n-afecta-desarrollo-econ%C3%B3mico>
- [47] Vitor Gaspar y Sean Hagan. “Corrupción Una carga oculta sobre el crecimiento FMI”. <http://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=6076>
- [48] María Amparo Casar. “México: Anatomía de la Corrupción”. Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO). 2015. [http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/05/2015\\_Libro\\_completo\\_Anatomia\\_corrupcion.pdf](http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/05/2015_Libro_completo_Anatomia_corrupcion.pdf)
- [49] Mercedes Aráoz: “Costos económicos de la corrupción”. <http://peru21.pe/opinion/mercedes-araoz-costos-economicos-corrupcion-2219424>

- [50] JESÚS LIZCANO ÁLVAREZ. “Efectos económicos de la corrupción”. 8 SEP 2011. Diario EL PAIS, España. [http://elpais.com/diario/2011/09/08/opinion/1315432805\\_850215.htm](http://elpais.com/diario/2011/09/08/opinion/1315432805_850215.htm)
- [51] La corrupción retrasa inversiones en América Latina. TENDENCIAS,. 12 febrero, 2016. ebizLatam
- [52] La democracia en América latina se juega en la lucha contra la corrupción. Infolatam, Madrid, 23 de septiembre de 2015
- [53] Raimundo Soto. La corrupción desde una perspectiva económica. Estudios Públicos, 89 (verano 2003).
- [54] Raimundo Soto. La corrupción desde una perspectiva económica. Estudios Públicos, 89 (verano 2003).
- [55] Pavel Isa Contreras. “La lucha contra la corrupción”. El Caribe, 20/01/2017. <HTTP://WWW.ELCARIBE.COM.DO/AUTORES/PAVEL-ISA-CONTRERAS>

## LATIN AMERICA AND THE POLITICAL ECONOMY OF CORRUPTION

**Elvis Ojeda Calluni**

Head of economic research program of the Center  
for Latin American Research (CLAR)  
Of Russian People’s Friendship University  
6, Mikluho-Maklaya Str., 117198 Moscow, Russia  
[ejeda@mail.ru](mailto:ejeda@mail.ru)

### ABSTRACT

*This article analyzes the political economy of corruption in Latin America. It seeks to explain corruption from the economic perspective by describing the economic opportunities in the region for corruption. A description of the current situation is made, with emphasis on the weakness of democratic institutions and growing social intolerance against corruption, describing the most important episodes that characterize systemic corruption in the region. Finally, an assessment is made of the economic costs of corruption and its impact on economic and social development.*